

COLUMNA DE OPINIÓN • DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Decisiones político-ideológicas o rol del Estado: los riesgos para nuestra soberanía y seguridad alimentaria, el empleo y la agricultura chilena

“La seguridad alimentaria ha sido una política de Estado en Chile durante casi cien años, sin importar el color político de cada gobierno. Lo preocupante es que hoy veamos decisiones políticas, como no aplicar el MEPCO, que ponen en riesgo justamente eso: la comida en la mesa de las familias.”

CASI CIENT AÑOS DE POLÍTICA DE ESTADO

La seguridad alimentaria ha sido una tarea que el Estado de Chile ha desarrollado desde hace varias décadas. Destacan la creación del primer Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición de Chile en el año 1936 y, en la misma década y bajo el gobierno de Arturo Alessandri, la promulgación de la ley 6.236, conocida como “Madre y Niño”, que incluyó la entrega de leche y atención infantil para las familias de trabajadores.

En esos años, y a raíz de la crisis mundial denominada “Gran Depresión”, la preocupación del Estado y de los políticos por el bienestar social y el cuidado de las economías familiares cobró mayor fuerza. El Frente Popular, que llevó a la presidencia a Pedro Aguirre Cerda en el año 1938, puso énfasis en acentuar el apoyo estatal en diversos ámbitos sociales, y en su candidatura utilizó dos eslóganes principales: “gobernar es educar” y “pan, techo y abrigo”.

La alimentación de las y los niños ha sido objeto de diferentes acciones, y es a través de la alimentación escolar que el Estado buscó asegurar un plato de comida para una población con mayores índices de pobreza producto de los profundos problemas sociales. Es así como, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964), en el que hubo una significativa expansión de las escuelas, se creó de manera definitiva la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB.

En esa época, los índices de desnutrición infantil eran altos, y así lo señalaba el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, candidatura presidencial de Salvador Allende:

“El 50% de los menores de 15 años están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse”.

Por lo que una de las primeras medidas del gobierno de la UP fue la ejecución del Plan Nacional de Leche, orientado a entregar medio litro de leche diaria a las madres y a sus hijas e hijos hasta los 15 años. Este programa estuvo acompañado de la asistencia del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Agricultura en colaboración con la CORFO, que publicaron el Plan Internacional para la Coordinación del Fomento Lechero.

El Plan, alabado por otros países, fue criticado por los sectores de la derecha política de la época, que buscaron desacreditar la iniciativa estatal. La oposición manifestaba que la leche traía drogas que les lavarían el cerebro a sus hijos, e incluso se mofaba de esta política, que fue descalificada como “leche comunista”.

HITOS DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA EN CHILE

1932	Comisariato General de Subsistencias y Precios (Carlos Dávila)
1936	Primer Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición
1930s	Ley 6.236 “Madre y Niño” (Arturo Alessandri)
1938	Frente Popular: “pan, techo y abrigo”
1964	Creación definitiva de JUNAEB (Eduardo Frei Montalva)
UP	Plan Nacional de Leche (Salvador Allende)
1990s	Elige Vivir Sano y Ley 20.606 ante la malnutrición por exceso
2017	Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición
Hoy	Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria (ENSSA)

Ya después de la dictadura cívico-militar, en la década de los 90, llegó la denominada “comida rápida o chatarra” y, a partir de ese hito, el problema del Estado chileno pasó de una población con desnutrición a una con sobrepeso y obesidad. Para enfrentarlo se ha creado el programa Elige Vivir Sano y se han aprobado leyes como la Ley 20.606, sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Por último, destaca la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria (ENSSA), generada en el gobierno del presidente Gabriel Boric, que tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria presente y futura de manera interseccional.

Son vastas las políticas que se han implementado en Chile para asegurar una alimentación sana frente a las diferentes causas que originan una eventual inseguridad: la desnutrición o el sobrepeso y la obesidad.

La alimentación sana es la base de todas las sociedades; por ello se le debe dar seguimiento y fortalecer año a año, y el Estado es quien debe estar a cargo de esta tarea a través de sus diferentes funciones y poderes. Desde el Parlamento, además del trabajo diario, en el año 2017 se creó el “Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición”, que tiene como objetivo promover leyes hacia la erradicación de la malnutrición en todas sus formas, particularmente el sobrepeso y la obesidad. Es una instancia en la que participan diferentes países, tanto de Latinoamérica como del mundo, y que permite resguardar la promoción de iniciativas legislativas en la materia.

DE LA DESNUTRICIÓN AL EXCESO

Hoy, Chile enfrenta un desafío nunca visto. Antes nuestro problema era la desnutrición, con periodos importantes de inseguridad alimentaria como el de la década de 1980,

época en la cual, señala el profesor de la Universidad de Chile Fernando Vio:

“El producto interno bruto cayó en un 12% en 1982 y luego en un 2% agregado al año siguiente, produciéndose una desocupación cercana al 50% de la fuerza laboral. En esos años, mediciones de ingesta calórica realizadas en la periferia de Santiago mostraron un consumo por persona de 1600 a 1700 calorías, en base a pan, té con azúcar, arroz, fideos y papas. Con la reactivación económica a fines de los 80 la situación cambió y mediciones realizadas en los mismos lugares en 1993 mostraron un consumo de 2700 a 3100 calorías por persona, lo que coincide con el incremento de la obesidad en el país”.

INGESTA CALÓRICA POR PERSONA EN LA PERIFERIA DE SANTIAGO

1980s		1.600–1.700
1993		2.700–3.100

Calorías diarias. Fuente: Fernando Vio, Universidad de Chile.

EL DESAFÍO DE HOY

En materia pública, el país ha avanzado de manera importante en instalar la seguridad alimentaria como un tema prioritario de la política pública y en promover una alimentación más saludable. De acuerdo con el último informe *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo* (SOFI 2026), la subalimentación, o hambre como se conoce en Chile, es casi inexistente, llegando sólo al 2,5% de la población; si bien es bajo, todavía hay tarea que hacer, y refleja que las políticas alimentarias en esa materia han sido exitosas.

Sin embargo, en la actualidad enfrentamos otro tipo de desafíos en comparación con décadas anteriores. Hoy, el principal problema es la inseguridad alimentaria, y así lo asevera el informe, que indica que el 36,8% de la población chilena (7,3 millones de personas) no puede costear una dieta saludable, lo que nos sitúa en peor posición que Brasil, Paraguay, Ecuador y Perú. Estos resultados se explican por el aumento del costo de una dieta saludable en Chile, que pasó de 3,38 a 5,65 dólares PPA (paridad de poder adquisitivo) por persona al día entre 2017 y 2025, un alza del 67%; es decir, comer sano hoy es más caro para las y los chilenos. En esta situación se ven más afectadas las mujeres que los hombres, así como las personas que habitan sectores rurales más que las urbanas.

CHILE EN CIFRAS · SOFI 2026

2,5%

de la población con subalimentación

36,8%

no puede costear una dieta saludable (7,3 millones)

+67%

costo diario de una dieta sana: US\$3,38 a US\$5,65 PPA (2017–2025)

40,5%

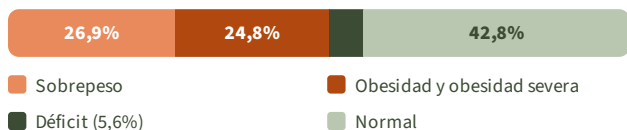
de obesidad adulta en 2024 (6,3 millones), la más alta de Sudamérica

Fuente: FAO et al., SOFI 2026.

El mismo informe indica que la obesidad adulta en Chile equivale al 40,5% en 2024 (6,3 millones de personas), la más alta de Sudamérica. Las cifras son similares para las niñas y van en aumento, lo que es alarmante y que, sumado a una dieta saludable de alto costo, llama con urgencia a trabajar más intensamente en esta materia.

De acuerdo con los resultados (2025) del último Mapa Nutricional de JUNAEB, el 26,9% de los estudiantes se encuentra con sobrepeso y un 24,8% con obesidad y obesidad severa; es decir, más de la mitad de los estudiantes evaluados (51,7%) tiene malnutrición por exceso. Solo un 5,6% presenta malnutrición por déficit (desnutrición y riesgo de desnutrición), y el 42,8% presenta una situación nutricional considerada “normal”.

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES · JUNAEB 2025



51,7% con malnutrición por exceso. Fuente: JUNAEB, Mapa Nutricional 2025.

LO QUE VEMOS EN LOS TERRITORIOS

Estos resultados son producto de múltiples factores. Quienes recorremos permanentemente los territorios vemos cómo la agricultura familiar campesina y la pesca artesanal, principales abastecedores de una dieta saludable, enfrentan cada año mayores dificultades para cultivar o extraer alimentos, dadas por el alza del precio del combustible, la crisis climática, la escasez hídrica, el aumento del costo de los fertilizantes, los insumos y la energía, las altas cifras de desempleo, además de las dificultades para acceder a financiamiento y comercializar sus productos en condiciones justas. A ello se suma la particular realidad de la pesca artesanal, donde miles de familias deben desarrollar su actividad en un escenario de creciente presión sobre los recursos y de permanente tensión con la pesca industrial.

Como antes describíamos, el Estado de Chile permanentemente ha generado leyes o programas para asegurar la alimentación de la población; pero estos no solo deben ir en línea directa, sino que deben ser acompañados por estrategias intersectoriales que aseguren la producción de alimentos y que las personas tengan la posibilidad de comprarlos. Es por ello que las decisiones de política económica no pueden interrumpir esa convicción de política de Estado y no de gobierno.

SIN MEPCO

Ante ello, es preocupante que el Gobierno haya decidido no aplicar el MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), una herramienta del Estado de Chile creada para evitar que el precio de la bencina, el diésel y otros combustibles cambie de forma brusca por culpa del mercado internacional y de los efectos de guerras entre países que producen e inciden en su precio. Es decir, se creó para proteger el bolsillo de las familias y evitar saltos de precios de una semana a otra.

Medidas similares ya se han aplicado en otras épocas, como la creada en el año 1932 por el presidente Carlos Dávila en respuesta a la crisis causada por la Gran Depresión: el “Comisariato General de Subsistencias y Precios”, organismo que centralizó la regulación de precios con el objetivo de garantizar el acceso a bienes básicos de consumo, ya que en ese contexto el problema de los alimentos era prioritario: además de altos precios y cesantía, hubo problemas de desabastecimiento. Una situación similar a la que vivimos hoy, donde el desempleo ya llega a las dos cifras a nivel nacional y, específicamente en mi región, alcanza al 10%, y la informalidad laboral al 30%.

En los últimos años hemos visto cómo el precio del petróleo varía producto de guerras, recientemente las que ocurren en países como Ucrania o entre Estados Unidos e Irán, lo que impacta directamente en las economías de los hogares, en los trabajos o en las actividades productivas que se desarrollan para llevar dinero a las mesas.

Si bien Chile tiene yacimientos de petróleo ubicados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, específicamente en el sector de Tierra del Fuego, bajo las aguas del Estrecho de Magallanes, su producción cubre una pequeña proporción del consumo interno. Es decir, el país debe importar más del 95% del combustible que consume, el que proviene de países de Sudamérica como Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia, además de complementarse con envíos desde Estados Unidos.

COMBUSTIBLES Y EMPLEO

+\$300

por litro de bencina desde marzo de 2026

+\$400

por litro de diésel desde marzo de 2026

>95%

del combustible que consume Chile es importado

10% • 30%

desempleo regional e informalidad laboral

El precio del petróleo se fija en los mercados mundiales, como el Brent (Europa y el resto del mundo) y el WTI (Estados Unidos), y después llega a Chile, donde es comercializado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). A ese valor se le deben sumar los costos asociados a la importación, el IVA, el margen de ganancia de las empresas que distribuyen y, hasta hace unos pocos meses, el impuesto específico, constituido por un componente base y un componente variable que regula el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Pero ese estabilizador hoy no existe, y vemos cómo la bencina y el diésel han aumentado en más de \$300 y \$400 por litro, respectivamente, desde marzo de 2026.

La situación es insostenible: está poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de la población, pero también sus trabajos.

El Estado debe cumplir con su rol de dar bienestar a las y los chilenos, y en las decisiones de gobierno debe primar ello y no las teorías económicas.

TODA LA CADENA

Resguardar la seguridad alimentaria no es tan solo asegurar alimentos, sino toda la cadena productiva y a quienes hacen posible que tengamos alimentos en la mesa, pero también que existan empleos que permitan costear una canasta saludable de alimentos, situación que posibilitan también las empresas, como por ejemplo los packing de frutas de exportación o las viñas, y los mercados de comercialización y distribución, como las ferias libres, a quienes también impactan este tipo de decisiones.

Agricultura familiar campesina

Pesca artesanal

Packing y viñas

Ferias libres

Empleo